



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veinte cuatro (2024)

S21-012

ASUNTO:	APELACIÓN auto incidente liquidación sentencia
DEMANDANTES:	SAMUEL PORRAS MARTÍN JOSÉ MARÍA PORRAS MARTÍN ALVARO VARON BENJAMIN CHIQUIZA TORRES OSBAL GÓMEZ VEGA JAIRO RODRIGUEZ CARRILLO CARLOS JULIO RINCÓN RAMOS RAFAEL ANTONIO PIEDRA CARLOS ALFONSO MARTIN JUAN JOSÉ MARTÍN
DEMANDADO:	CRISTALERÍA PELDAR S.A.
RADICADO:	05266-31-05-001-2009-00330-05
DECISIÓN:	REVOCA

Link: [05266310500120090033005](https://expediente.digital/05266310500120090033005) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la decisión mediante la cual el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado decidió lo atinente al incidente de liquidación de sentencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 3** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, mediante sentencia el día 15 de abril de 2016, efectuó las condenas que se sintetizan en el siguiente cuadro:

DEMANDANTE	CONDENAS			
SAMUEL PORRAS MARTÍN	indemnización art. 64	pensión jubilación	sanción art. 65	indexación
JOSÉ MARÍA PORRAS MARTÍN	indemnización art. 64	pensión jubilación	sanción art. 65	indexación
ALVARO VARON	indemnización art. 64	pensión jubilación	sanción art. 65	indexación
BENJAMIN CHIQUIZA TORRES	REINTEGRO			
OSBAL GÓMEZ VEGA	REINTEGRO			
JAIRO RODRIGUEZ CARRILLO	no reintegro	indemnización art. 64	pensión jubilación	sanción art. 65
CARLOS JULIO RINCÓN	no reintegro	indemnización art. 64	pensión jubilación	sanción art. 65
RAFAEL ANTONIO PIEDRA	no reintegro	indemnización art. 64	pensión a futuro	sanción art. 65
CARLOS ALFONSO MARTIN	no reintegro	indemnización art. 64	no pensión porque se pagaron aportes	sanción art. 65
JUAN JOSÉ MARTÍN SEGURA	no reintegro	indemnización art. 64	no pensión porque se pagaron aportes	sanción art. 65

ABSOLVIÓ a la demandada de las restantes pretensiones incoadas en su contra.

El 11 de mayo de 2018, mediante sentencia proferida en segunda instancia, en lo que hoy interesa, se dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: se **DECLARA** que las personas que se enlistan en el numeral tercero de esta providencia, son beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 21 de noviembre de 2007 por Cristalería Peldar S.A. y SINTRAVIDRICOL.

TERCERO: se **REVOCA** la decisión proferida en primera instancia en cuanto al reintegro y la indemnización regulada en el art. 64 del CST concedidas por el a quo y en su lugar se **CONDENA** a **CRISTALERÍA PELDAR S.A.** que reconozca y pague a los trabajadores que aquí se mencionan, la **INDEMNIZACIÓN CONVENCIONAL** por ocasión del despido sin justa causa, liquidación que corresponderá efectuar a la demandada en los términos consagrados en la parte motiva, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 27 y 82 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 21 de noviembre de 2007, teniendo en cuenta para ello como extremo final el 7 de enero de 2009 y como inicial el siguiente:

DEMANDANTE	EXTREMO INICIAL
SAMUEL PORRAS MARTÍN	13/01/1978
JOSÉ MARÍA PORRAS MARTÍN	13/01/1978
ALVARO VARON	01/10/1979
BENJAMIN CHIQUIZA TORRES	20/02/1978
OSBAL GÓMEZ VEGA	26/06/1980
JAIRO RODRIGUEZ CARRILLO	20/01/1983
CARLOS JULIO RINCÓN RAMOS	01/02/1982
RAFAEL ANTONIO PIEDRA	01/02/1984
CARLOS ALFONSO MARTIN	18/03/1993
JUAN JOSÉ MARTÍN	13/07/1986

El monto que le corresponda a cada trabajador será **INDEXADO** por la accionada de acuerdo a los parámetros expuestos en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: se **CONDENA** a **CRISTALERIA PELDAR S.A.** a reconocer y pagar a favor de los señores SAMUEL PORRAS MARTÍN, JOSÉ MARÍA PORRAS MARTÍN, ALVARO VARON, BENJAMIN CHIQUIZA TORRES, OSBAL GÓMEZ VEGA, JAIRO RODRIGUEZ CARRILLO, CARLOS JULIO RINCÓN RAMOS, RAFAEL ANTONIO PIEDRA, CARLOS ALFONSO MARTIN y JUAN JOSÉ MARTÍN, las **primas extralegales** (junio, navidad, vacaciones y antigüedad)

causadas entre el 14 de marzo de 2006 y el 7 de enero de 2009, liquidación que le corresponderá efectuar a la sociedad demandada, en los términos regulados en la normativa convencional vigente a la causación de cada una de ellas y con base en el salario mínimo convencional aplicable en cada anualidad respecto de la categoría I para el oficio de labores varias, monto que también deberá ser indexado al momento del pago.

Se **AUTORIZA** al empleador a descontar a cada trabajador, de los montos que adeude a aquellos, los emolumentos que sobre el mismo concepto hubiere liquidado y pagado a los demandantes en cumplimiento de sentencia primigenia a través de la cual se ordenó, entre otras, el pago de primas y vacaciones de carácter legal.

QUINTO: se **CONDENA** a **CRISTALERIA PELDAR S.A.** a reconocer y pagar a los señores SAMUEL PORRAS MARTÍN, JOSÉ MARÍA PORRAS MARTÍN, ALVARO VARON, BENJAMIN CHIQUIZA TORRES, OSBAL GÓMEZ VEGA, JAIRO RODRIGUEZ CARRILLO, CARLOS JULIO RINCÓN RAMOS, RAFAEL ANTONIO PIEDRA, CARLOS ALFONSO MARTIN y JUAN JOSÉ MARTÍN, el **REAJUSTE DE LAS CESANTÍAS** a que hubiere lugar, diferencia que resultará de la cuantificación que le corresponderá realizar a la demandada al liquidar el auxilio de cesantías con el salario mínimo convencional vigente durante los extremos temporales que rigió la relación laboral (descritos en el numeral tercero del fallo) y restarle lo que en tal lapso hubiese correspondido con el SMLMV, monto que igualmente será **indexado** al momento del pago, en los términos previstos en esta providencia.

SEXTO: se **REVOCA** la condena tendiente al pago de la **SANCIÓN MORATORIA** regulada en el art. 65 del CST y en su lugar se **ABSUELVE** a CRISTALERÍA PELDAR S.A. del reconocimiento y pago de dicha pretensión.

SÉPTIMO: se **ACLARA y ADICIONA** la decisión apelada, toda vez que la prestación que deberá reconocer **CRISTALERÍA PELDAR** a favor de los señores SAMUEL PORRAS MARTÍN, JOSÉ MARÍA PORRAS MARTÍN, ALVARO VARON, JAIRO RODRIGUEZ CARRILLO, CARLOS JULIO RINCÓN RAMOS y RAFAEL ANTONIO PIEDRA será la **PENSIÓN SANCIÓN** regulada en el art. 133 de la Ley 100 de 1993, la que corresponderá liquidar a la sociedad demandada en los términos previstos en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: se **CONDENA** a **CRISTALERIA PELDAR S.A.** a reconocer y pagar a los señores BENJAMIN CHIQUIZA TORRES y OSBAL GÓMEZ VEGA, la **PENSIÓN SANCIÓN** a partir del 16 de octubre de 2012 y 20 de noviembre de 2021 respectivamente, liquidación que efectuará la demandada conforme los lineamientos previstos en el numeral séptimo de esta sentencia.

NOVENO: se **CONDENA** a **CRISTALERIA PELDAR S.A.** a reconocer y pagar a los señores SAMUEL PORRAS MARTÍN, JOSÉ MARÍA PORRAS MARTÍN, ALVARO VARON y CARLOS JULIO RINCÓN RAMOS, la suma de \$6.186.240 a cada uno a título de **AUXILIO DE JUBILACIÓN** consagrado en el art. 49 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el 7 de enero de 2009, monto que será indexado al momento del pago de la obligación.

En firme la providencia, el 19 de octubre de 2019, se promueve incidente de liquidación de la condena, bajo los parámetros estipulados en el art. 283 del CGP dado que no se estipularon cifras en concreto.

En síntesis, la empresa sostiene que en noviembre de 2018 pagó un valor neto de \$3.396.447.179, extinguiéndose la obligación por pago.

Por su parte, los demandantes indican que dicha cifra es deficitaria, dado que Cristalería Peldar S.A. debe incluir las primas extralegales (vacaciones, antigüedad, junio y navidad) como factor salarial de acuerdo al manual de nómina (documentos que solicitan se decrete como prueba de oficio) y la convención colectiva, razón por la cual el salario promedio está compuesto por el salario básico y ese factor prestacional. En otras palabras, consideran que debe sumarse el salario básico percibido durante el año, *el factor prestacional*, así como el valor de aquellas cuatro prebendas convencionales, y el resultado dividirlo por 360 para obtener el factor diario en atención a lo establecido en el art. 82 convencional. Que como

consecuencia de ello, se debe **reliquidar el auxilio de cesantía, la indemnización por despido y la pensión de jubilación**. También exponen otras razones de disenso, entre ellas:

- La imposibilidad de descontar los aportes a salud tratándose de una pensión sanción a cargo de la empresa, punto en el que posteriormente destaca que la demandada tampoco demostró su pago a favor de alguna EPS.
- NO acreditarse el pago realizado por la *condena anterior*¹, razón por la cual NO es dable deducir ese monto.
- Desconocimiento de la primera mesada pensional, variaciones, mesadas adicionales, retroactivo e indexación, aspecto en el que acepta el pago de \$3.490.634.205, señalando que, *al parecer*, es por concepto de pensión de jubilación.
- Recuerda que, para efectos de la liquidación de las agencias en derecho, debía considerarse el grado de *complejidad extraordinaria* y una duración superior a 10 años, aunado a que según el Acuerdo 1887 de 2003, las costas corresponden hasta el 25% del valor de las pretensiones reconocidas, que se incrementará hasta 4 SMLMV cuando además reconocía obligaciones de hacer.

A folio 1036 se aprecia la liquidación allegada por la parte actora, discriminando lo adeudado a cada uno de los 10 trabajadores. Aclara que, para facilitar la liquidación del despacho, acepta la forma en la cual CRISTALERIA PELDAR S.A. liquidó las primas de vacaciones, antigüedad, prima de junio y prima de navidad. A continuación, indica que como estas son factor salarial, tales rubros inciden en la tasación de la pensión sanción. Reitera la improcedencia del descuento de aportes a salud, máxime si *el riesgo a salud no se causa retroactivamente*.

Tras llevarse a cabo una etapa probatoria en la que se escuchó la declaración del Dr. RICARDO TORRES (quien explicó la forma en que la empresa efectuó la liquidación), el a quo, reconociendo que se habían presentado una serie de interpretaciones respecto de la decisión adoptada en segunda instancia, decidió acoger y aprobar la liquidación presentada por Cristalería Peldar S.A. al estimar que la misma cumplía con los parámetros establecidos en la sentencia de segunda instancia. Tasó como agencias en derecho la suma de \$900.000.000, de *manera global* (es decir, todo lo incluido en el proceso ordinario e incidente) a cargo de la parte demandada.

Contra dicha decisión ambas partes interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

¹ Entiéndase aquel proceso primigenio, diferente al actual, en el que los demandantes lograron la declaratorio de la existencia de una relación laboral y el pago de prebendas de carácter legal, diferentes a las convencionales deprecadas en proceso posterior, el que hoy precisamente convoca a la Sala.

En síntesis, considera que NO se puede discutir el carácter salarial de las primas, ni incluirlas en las tasaciones que se pretende, por cuanto en la providencia dictada por el tribunal, pese a que se declaró que los demandantes eran beneficiarios de la convención, lo cierto es que expresamente indicó, respecto del salario para cuantificar las *prebendas convencionales* y el reajuste de las cesantías, que se acogería el del menor valor, es decir, *la categoría I de la estructura de jornales para el oficio de labores varias* para el año 2007, aumentado de acuerdo a los parámetros estipulados en el art. 27 de la citada convención para hallar el vigente al 2009 (que era superior al mínimo legal mensual vigente en esa última anualidad).

Ello aunado a la negativa de adición y aclaración de sentencia formulada por la parte actora, donde la segunda instancia insistió que debía liquidarse la condena en atención al salario mínimo convencional, pero sin precisar qué factores lo componían, aspecto en el que precisamente hoy se edificaba la súplica de la parte actora al solicitar el reajuste de la liquidación de la condena, postura polarizada y sin ningún punto de encuentro de cara a la sostenida por el empleador, último que acertó al cuantificar los haberes en los precisos términos de la providencia, acogiendo de esta manera el pago realizado por la parte resistente del juicio, aunque aceptó que podían existir diferentes interpretaciones del texto de la sentencia en los apartes que referencia al entender que los trabajadores eran beneficiarios de TODAS las conquistas laborales, pero como paralelamente se fijaban los parámetros de liquidación, no podía apartarse de los mismos, ni entrar a darle una interpretación a la providencia emitida por el superior funcional.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN

2.2.1. INSTAURADO POR LA PARTE ACTORA

Insiste en los motivos de inconformidad planteados en los alegatos de conclusión, advirtiendo que por economía no los reiteraría.

Considera que el problema jurídico NO es de interpretación de la sentencia del tribunal, ni de su *complementación*, toda vez que la misma contemplaba obligaciones claras, expresas y exigibles, y lo que debía buscarse era una aplicación integral del cuerpo de la sentencia bajo el principio de favorabilidad que corresponde no sólo por mandato convencional, sino además constitucional, a los trabajadores.

Destaca que dicha providencia, en parte alguna, limita la cuantificación al salario mínimo legal convencional de la estructura, sino que, por el contrario, en su complemento hablaba que se debía sujetar en lo dispuesto, en su integridad, a la convención colectiva vigente a la fecha de su causación. Ello se desprendía de aquellas frases como: *en lo que a este asunto interesa, expresamente se anotó que las primas extralegales (junio, navidad, vacaciones y antigüedad) causadas entre el 14 de marzo de 2006 y el 7 de enero de 2009, cuya liquidación correspondería efectuar a la sociedad demandada, se haría en los*

términos regulados en la normativa convencional, normativa que no indicaba que debía ser con el salario mínimo, pues en algunos apartes aludía al salario básico y en otros al salario promedio. Prosigue con la lectura de la providencia, cuando se indicó *lo que quiere decir que si alguna incidencia tiene en la tasación de tales primas el denominado salario en especie, la demandada deberá sujetarse a lo que se obligó al suscribir la convención*. Considera este un punto sustancial, pues precisamente su pretensión es que se produzca el efecto jurídico de la norma convencional y si en la misma está pactado, al tenor del art. 26, que las primas son factor de salario, NO entiende porque se modifica el texto restándole esa calidad en la cuantificación de la condena. Añade que considerar que la norma NO se aplica a los *trabajadores retirados*, sino activos, sería una antinomia.

Aunado a ello, el tribunal señala que en el acápite de pretensiones NO se solicitó el reconocimiento de alguna prima con carácter salarial *si es que no lo tenía*, frase que reconoce que sí lo tiene.

Además, según el numeral tercero del fallo, la tasación debía efectuarse en los términos consagrados en la parte motiva *y en concordancia con los artículos 27 y 82*. El primero de ellos habla del factor prestacional, de ahí que no podía desconocerse que las prestaciones sociales eran factor de salario. El segundo alude que la indemnización se liquidará con el salario promedio. Desde esta óptica, NO debe realizarse ninguna interpretación, pues claro es el enfoque, o de realizarse una interpretación, la misma debe ser armónica y sujeta al Manual de Nómina que contiene las políticas de la empresa al aplicar la convención. En este aspecto señala que el art. 26 se refiere al salario en especie y conforme el tribunal, si a eso fue lo que se obligó la empresa, pues eso debe pagar.

En tal sentido, NO debe entenderse que el tribunal ordenó excluir unos derechos convencionales, por el contrario, hay una contradicción, pues el *ad quem* claramente señala que la convención se aplicará de manera integral, la que reconoce unos derechos convencionales. Así las cosas, el salario está integrado por: el básico, el factor prestacional y las primas como factor de salario.

De otro lado, solicita un pronunciamiento expreso sobre el destino que van a tener los descuentos a título de aporte a la seguridad social, manos aun cuando no se acreditó su pago a ese subsistema, ni la sentencia autorizó ese descuento. Esos aportes son de los trabajadores, NO así un bien jurídico como para que la empresa se quede con eso.

Añade que la demandada dedujo dos veces las cesantías en salarios mínimos legales pues aprovecho para deducir una serie de pagos que no obedece a derechos convencionales, como los intereses a las cesantías, la indexación y las costas, haciendo un volumen generoso de deducciones.

La demandada tampoco indexó el retroactivo de la pensión de jubilación.

PELDAR no presentó el IBL de una forma transparente que respete el debido proceso. Tampoco es clara la tasa de remplazo.

NO entiende porque PELDAR considera, en una tasación de la cual NO dio traslado, que los trabajadores le deben \$245.000.000, es algo incongruente.

En dichos términos solicita revocar en su integridad la decisión proferida por el despacho, aplicándose los derechos convencionales.

2.2.2. RECURSO DE APELACIÓN PELDAR S.A.

Centra su inconformidad en dos aspectos.

De un lado, la tasación de las agencias en derecho aduciendo que conforme el Acuerdo 1887 de 2003, existen unos criterios para cuantificarlas como la naturaleza del asunto, la calidad, la duración, la gestión de los apoderados, la cuantía de la pretensión, entre otras, razón por la que considera que unas costas por valor de \$900.000.000 son muy elevadas, desproporcionadas y desconoce el porcentaje establecido en la norma, razón por la cual deben MODIFICARSE.

De otro lado, la negativa del despacho al NO pronunciarse sobre el pago en exceso pues, aunque acogió la liquidación presentada por CRISTALERÍA PELDAR, desconoció el error inicial de la empresa al efectuar un depósito por \$3.396.000.000, cuando lo correcto era \$3.150.948.000, generándose una suma en exceso por \$245.498.788, debiéndose condenar a los demandantes a reintegrar esa suma de dinero y compensadas de las costas judiciales.

3. ALEGATOS

3.1. PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA

Considera que la providencia es errada, en cuanto adoptó la liquidación presentada por CRISTALERIA PELDAR S.A. con una lectura e interpretación basada en parámetros que descontextualiza las providencias que resolvieron la litis y viola, entre otros, el principio de inescindibilidad de la norma, la interpretación más favorable para los trabajadores y el principio de legalidad, contexto bajo el cual realiza algunas apreciaciones en torno a lo que debe entenderse frente a cada uno de estos principios, de acuerdo a la jurisprudencia que reseña.

Que en tal sentido la Convención Colectiva, como norma, debía aplicarse de manera íntegra, y por ello no debió señalarse por la vía de interpretación que el Tribunal LIMITÓ su alcance, pues el genuino sentido integral se desprende de los párrafos que cita (tanto de la sentencia como de aquella providencia que negó su aclaración y complementación), cuya lectura debe atar a cualquier lector, que califica como de sustancial importancia para seguir el norte de comprensión de que los trabajadores son titulares de todos los derechos convencionales.

Continúa su intervención expresando que:

Le faltó ponderación, en el interrogatorio de parte al representante legal de CRISTALERIA PELDAR S.A el día 2 de diciembre de 2019 en la audiencia especial de liquidación de sentencia cuando dijo, en el minuto 37:36 de la grabación:

“... para efectos de los trabajadores activos como lo expresé ya en la intervención anterior, se toma el salario en dinero, el factor prestacional y algunas de las primas que constituyen salario para sus efectos, cuando se trate de activos, en este caso repito, como se trata de una decisión judicial, nos atuvimos en lo previsto en la sentencia...”

Pretendiendo excluir a los extrabajadores demandantes. Y ese error fue el que arrastró a la providencia.

Pero, esa es, a contrario sensu, la confesión del cómo se liquidan en Peldar los derechos de los trabajadores, como los actores, cuyo criterio no aplicó para el caso, a pesar de que el debate que quiso presentar ya había sido resuelto en la sentencia final del ordinario y no es forzado deducir que en la empresa existe el manual de liquidación para los trabajadores activos, caso en el cual aplica para liquidar a los trabajadores demandantes, cuyo estatus de trabajadores no se discute en esta litis, postura que se trajo para faltar a la colaboración de la administración de la justicia, como lo hizo también al negarse a responder el oficio ordenado por auto del 16 de enero del 2019 que es del siguiente tenor, que le ordenó a CRISTALERIA PELDAR S.A presentar la siguiente información:

“... una liquidación específica, explícita y concreta por cada trabajador discriminando la forma de obtención y liquidación del salario, factores salariales y su forma de liquidación, con el aporte y/o soporte de la convención colectiva de trabajo, forma en que se liquida la indemnización por despido injusto, primas legales, extralegales y de antigüedad tales como junio, navidad, vacaciones y antigüedad, indicando los periodos y valores tenidos en cuenta año por año. El valor de la mesa pensional y forma de liquidación, como aplica la indexación y las fechas a tener en cuenta en soporte y monto de las deducciones por conceptos de pagos anteriores...”

PELDAR en la liquidación que presentó al proceso ocultó las bases de cómo llegó al salario que tomó para liquidar todos los derechos, no entregó los factores salariales ni la forma de liquidación, ni la actualización.

Que si ha de ser necesario interpretar, la misma debe ceñirse a los parámetros de orden legal, como el art. 53 de la Constitución Política, art. 21 del CPT y la SS, artículos 3 y 5 de la Convención (atinentes al campo de aplicación, además de la favorabilidad e irrenunciabilidad), sentencia T-730 de 2014 (sobre el principio *in dubio pro operario*). Insiste que, en todo caso, la sentencia no limitó beneficios, sino que ordenó la aplicación integral de todos los derechos convencionales.

Que la decisión atacada adoptó la liquidación que presentó la demandada, sin estudiar los demás detalles, y que fueron materia incluso del tema de alegato de conclusión. Y en el proceso no existe una liquidación que haya realizado el Juzgado.

Frente al SALARIO, expresa que en la convención está pactado que las primas de junio, navidad, vacaciones y antigüedad son factor de salario, lo que tiene un efecto jurídico directo en la liquidación del auxilio de cesantía, la indemnización convencional y la primera mesada de la pensión de jubilación. Esto es, que hacen parte de la remuneración más el factor prestacional, que se adiciona al salario básico. Que aunado a ello CRISTALERIA PELDAR S.A., en el manual de nómina, determina como debe integrarse el salario para la liquidación de cada uno de estos derechos convencionales, lo que brinda tranquilidad absoluta del procedimiento que ha adoptado la empresa, que incluye el pago de las primas aludidas. Frente al punto expresamente señala que:

El artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo establece:

Para la categoría 1 un salario día al 21 de noviembre de 2009 de \$59.389.77.

Este es el salario básico, señalado en la sentencia para la estructura 1, con precisión ya que en esa estructura existen otros oficios varios, aseo y era esencial su ubicación en la estructura para los efectos legales. Y así está sentenciado.

El artículo 26 de la Convención Colectiva de Trabajo, que establece:

“... SALARIO EN ESPECIE Queda incorporada como parte de la convención colectiva el acta denominada “ACUERDO CONVENCIONAL. VALORACION SALARIO EN ESPECIE”, suscrita entre la Empresa y Sintravidicol el 9 de octubre de 1991 la cual hará parte de ésta sin que esté incluido en ella, y por lo tanto se depositará juntamente con la convención colectiva en el Ministerio de Trabajo...”
...

“... 2. La suma acordada o factor prestacional se tomará en cuenta únicamente para liquidar las siguientes prestaciones sociales legales: auxilio de cesantía, prima de servicios (junio y diciembre) y las vacaciones; y las siguientes prestaciones convencionales extralegales: prima de junio, prima de navidad, prima de vacaciones y antigüedad, de cada uno de los trabajadores, que se causen y paguen a partir del 1º de enero de 1991...”

Y tal acuerdo dispone, en parte, lo siguiente:

“... 6. A partir de la fecha de la celebración de este acuerdo se conviene incorporar como cláusula convencional los puntos uno y dos del capítulo denominado acuerdo. Por lo anterior todos los auxilios, servicios y beneficios o ventajas mencionados en el preámbulo de este escrito no constituyen elemento, ni factor de salario que implique derecho alguno adicional al de la suma convenida o factor prestacional, salvo las siguientes primas convencionales: prima de vacaciones y de antigüedad, prima de junio y prima de navidad, que son constitutivas de salario...”

Y, si la Convención colectiva expresamente dispone que tales primas son constitutivas de salario, no puede haber ninguna interpretación que les quite ese carácter salarial. Tanto es así, que CRISTALERIA PELDAR S.A lo incluye como tal en el manual de liquidación de nómina.

El salario de la categoría I es de \$59.389.77 según el artículo 25.

El artículo 39 de la Convención Colectiva de Trabajo transcritos establece una prima base de 29 días de salario promedio y una prima de antigüedad en función de los años de servicio. Quiero advertir que en el proceso no existen recargos legales para que constituyan promedio para la liquidación de estas dos primas.

El artículo 40 y 41 establecen el derecho a la prima de junio de 32 días y navidad de 48 días de salario base.

De esta manera reitera que PELDAR tomó un salario inferior al efectuar la liquidación.

De otro lado, en cuanto a las DEDUCCIONES indica que:

La sentencia ordena pagar derechos convencionales y por ello razonablemente dispuso restar el auxilio de cesantía determinado con el salario mínimo legal y las primas legales.

En la columna denominada pago por condena anterior PELDAR deduce la suma de \$159.460.839 y esa deducción no corresponde al valor realmente pagado.

En esos valores PELDAR incluyó las costas, intereses a la cesantía, cesantía, de ese primer proceso y por ello es exótico que haga esa deducción.

En suma, no probó cuales montos o condenas canceló, entonces se torna improcedente tal deducción.

Peldar determinó como auxilio Cesantías, en conjunto SML \$129.009.378.33 y como cifra pagado por condena anterior \$159.460.839,00 y ambas cifras las restó del gran total. Ese es una deducción doble.

Y en suma no demostró el valor pagado por prima de servicio, que era lo único adicional a la cesantía que podía deducir y que con certeza no corresponde a \$159.460.839.

Respecto a la EPS, insiste que esta deducción NO es procedente por tratarse de pensionados a cargo de PELDAR, en razón a que la empresa asumió el riesgo de salud y pensión, por lo que es ilegal el descuento de \$125.495.966, debiendo reintegrarse en proporción a cada trabajador para evitar un empobrecimiento del mismo y un enriquecimiento sin justa causa para la empresa, máxime si el riesgo de salud no se causa retroactivamente, es decir, *que si los aportes no se pagan de manera oportuna no significa que con la deducción de aportes a cargo del trabajador la empresa se exonere de la responsabilidad de asumir dicho riesgo*. Cita fragmentos de una sentencia dictada por el tribunal.

Frente a la PENSIÓN SANCIÓN señala que el IBL debe liquidarse con base en el denominado salario promedio que sirvió para cuantificar el auxilio a la cesantía y la tasa de remplazo no corresponde a la determinada en la ley. Consecuencialmente el RETROACTIVO está mal elaborado. Tampoco PELDAR le explicó a los trabajadores como desarrolló el valor de la pensión, pese a que tienen derecho a acceder a esa información; ni le entrega comprobantes, razón por la que sólo es dable anexar algunos extractos bancarios.

En cuanto a la INDEXACIÓN afirma que está mal elaborada dado que debe efectuarse hasta la fecha de la sentencia, aunado a que debe operar sobre el retroactivo de la pensión.

Sobre las COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO solicita confirmar la decisión del juzgado de conocimiento bajo la consideración de la valoración objetiva que hizo el A QUO de la duración del proceso de casi 14 años, la gran complejidad, el éxito obtenido, las múltiples etapas.

Finalmente considera que se deben señalar los valores en concretos para evitar la dilación del proceso, en especial el valor de la mesada pensional que debe seguir pagando la accionada a quienes tienen ese derecho.

3.2. ALEGATOS PELDAR S.A.

Solicita se confirme la decisión, modificándola en el sentido de no imponerle agencias en derecho, menos aun cuando fueron los demandantes quienes salieron vencidos.

Expuso que cumplió con el deber de liquidar cada concepto de la sentencia, presentando varios escritos al juez de primera instancia, efectuando el pago espontáneo de \$3.396.467.181, con el cual extinguió la obligación el 22 de enero de 2019; que incluso el señor Ricardo Torres López compareció al proceso brindando una explicación técnica de esta liquidación. Que ahora el demandante pretende la ejecución forzada de la sentencia, expresando nuevas situaciones, tales como que se *califique (sic) ser salario las prestaciones extralegales*, procedencia de los descuentos en salud, entre otros, temas no presentados en el proceso ordinario, no contenidos en la sentencia.

4. PROBLEMA JURIDICO

Consiste en determinar los parámetros para liquidar la sentencia de cara a los múltiples aspectos que generan disparidad de conceptos entre las partes en cuanto a los siguientes temas:

- Base salarial para liquidar el auxilio a la cesantía, la pensión sanción y la indemnización convencional.
- Procedencia de los descuentos de aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud.
- Deducciones autorizadas de las cesantías.
- Indexación.
- Estimación de las agencias en derecho.
- Destinación del pago en exceso.

5. CONSIDERACIONES

Sui generis resulta el asunto, máxime si tenemos en cuenta que toda la discusión se dio en el trámite incidental de liquidación sentencia en atención a la posibilidad que contempla el art. 283² del Código General del Proceso. A la fecha NO se ha dado inicio al ejecutivo laboral, y ello es dable precisarlo toda vez que algunos aspectos aquí debatidos escapan a la órbita de los asuntos que son dables examinar en este escenario, como más adelante se precisará.

Pero antes de adentrarnos en los puntos que debe examinar la Sala, resulta pertinente rememorar algunos asuntos, pues el contexto de lo sucedido permite ubicarnos y lograr un entendimiento global del conflicto suscitado entre las partes.

Así las cosas, encontrados que veintidós personas que ejecutaban labores en el oficio conocido como coter, en el año 2001, incoaron diversas acciones tendientes al reconocimiento de la existencia de una relación laboral con PELDAR y consecuentemente el pago de algunas prestaciones de carácter legal. En una segunda demanda, instaurada tras la culminación del vínculo que los unía con quien identificaban como su empleador, la totalidad de ellos pretendieron el pago de diversos haberes, pero esta vez de carácter convencional. Este último corresponde al proceso que hoy conoce la Sala. No obstante, sólo 10 de ellos culminaron con éxito la acción primigenia, los restantes fueron objeto de sentencias absolutorias.

En el trámite de la segunda instancia, del segundo proceso, en lo que hoy interesa, se declaró que estas 10 personas eran *beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 21 de noviembre de 2007 por Cristalería Peldar S.A. y SINTRAVIDRICOL*. Se negó el reintegro, así como las indemnizaciones reguladas en los artículos 64 y 65 del CST, los intereses moratorios y perjuicios morales, pero se condenó a la demandada a reconocer los siguientes conceptos:

- La indemnización convencional y auxilio de jubilación, debidamente indexados.
- Primas extralegales (junio, navidad, vacaciones y antigüedad), las cuales también debían ser indexadas. Frente a estas se autorizó descontar los emolumentos que sobre el mismo concepto hubiere liquidado y pagado *en cumplimiento de la sentencia primigenia a través de la cual se ordenó, entre otras, el pago de primas y vacaciones de carácter legal*.
- Reajuste a las cesantías “(...) a que hubiere lugar, diferencia que resultará de la cuantificación que le corresponderá realizar a la demandada al liquidar el auxilio de cesantías con el salario mínimo convencional vigente durante los extremos temporales que rigió la relación laboral (descritos en el numeral tercero del fallo) y restarle lo que en tal lapso hubiese correspondido con el SMLMV, monto que igualmente será indexado al momento del pago, en los términos previstos en esta providencia (...)”.

² (...) la condena en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior. Dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse el incidente se extinguirá el derecho.

También se efectuaron algunas precisiones en cuanto al reconocimiento, pago y liquidación de la pensión sanción. Y ante la necesidad de establecer el salario para tasar las condenas, sumado a la ausencia en el plenario de un manual donde se estipulará que actividades se desempeñaban en cada categoría de las contempladas en el escalafón de oficios previsto en la convención, se acogió la de menor valor, es decir, *la categoría I de la estructura de jornales para el oficio de labores varias para el año 2007 aumentado de acuerdo a los parámetros estipulados en el art. 27 de la citada convención para hallar el vigente al 2009, que en todo caso, tal y como se indicó, resulta muy superior al mínimo legal mensual vigente en esa última anualidad.*

Posteriormente, la parte actora solicitó complementación de la providencia indicando que las primas concedidas eran factor salarial por acuerdo convencional, petición resuelta de manera desfavorable al considerarse que estaba introduciendo asuntos que no habían sido pretendidos ni debatidos. Esto se dijo:

“(…) nos acogemos a las consideraciones expuestas en el acápite denominado **PREBENDAS CONVENCIONALES, oportunidad donde se explicó la forma de liquidar tales primas, que en síntesis, se circunscribe a lo dispuesto en su integridad por la Convención Colectiva de Trabajo vigente a la fecha de causación**, acuerdo en el que se estipula que en la de JUNIO Y NAVIDAD se tiene en cuenta el salario básico, en la de VACACIONES Y ANTIGÜEDAD uno promedio, eventos en los cuales, como se advirtió, se tendría en cuenta para efectuar los cálculos de rigor, la base del salario mínimo convencional, no el legal.

Ahora, si lo que pretende la parte es la aplicación de lo dispuesto en el art. 26 de la Convención Colectiva de Trabajo (véase folio 593 del cuaderno identificado con el Nro. 5C) relativa al salario en especie, norma que a su vez remite a la convención suscrita el 9 de octubre de 1991 (véase folios 289 a 299 del cuaderno identificado con el Nro. 5A contentivo de la misma), a igual conclusión llegaría la Sala, toda vez que en el numeral cuarto de la parte motiva de la sentencia proferida en segunda instancia, en lo que a este asunto interesa, expresamente se anotó que las primas extralegales (junio, navidad, vacaciones y antigüedad) causadas entre el 14 de marzo de 2006 y el 7 de enero de 2009, cuya liquidación correspondería efectuar a la sociedad demandada, **se haría en los términos regulados en la normativa convencional vigente a la causación de cada una de ellas, lo que quiere decir que si alguna incidencia tiene en la tasación de tales primas el denominado salario en especie, la demandada deberá sujetarse a lo que se obligó al suscribir la convención.**

De ahí que en los términos regulados por los artículos 285 y 287 del Código de General del Proceso, no se aprecien *conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda*, ni en la sentencia *se omitió resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento*, premisas bajo las cuales no es necesario realizar ninguna aclaración, menos aún si **en parte alguna del acápite de pretensiones se solicitó el reconocimiento de alguna prima con carácter salarial, si es que no lo tenía**, de ahí que la fijación del litigio nunca gravitó en establecer si determinadas prebendas constituían o no salario, mucho menos se puede analizar dicho carácter a través de este medio, pues lo contrario claramente implicaría sorprender a la contraparte con el análisis de un punto que nunca fue cuestionado ni siquiera en el recurso de alzada, lo que evidentemente sería una trasgresión al debido proceso. (Resaltos fuera de texto original)

Tras ello, PELDAR efectuó un pago, el que hoy catalogan los demandantes como deficitario.

Las palabras transcritas sirvieron de soporte a PELDAR para excluir de la base las primas convencionales que tenían carácter salarial. De ahí que para efectos de liquidar la pensión sanción, las cesantías y la indemnización, solamente tuvieron en cuenta el salario mínimo convencional, más el *salario en especie* (tasado en dinero cada anualidad). Ello lo acepta el testigo RICARDO ORRES LÓPEZ, encargado de

efectuar la liquidación en PELDAR. A continuación, se extraerán algunas de sus palabras, y aunque no corresponde a una transcripción literal, si recogen lo expresado en su intervención, así:

No se tomó en cuenta factores salariales de la convención porque se hizo teniendo en cuenta lo que señaló el tribunal en la sentencia aclaratoria, según la cual, lo que no se pidió en el proceso, NO se podía pedir después, y estableció su liquidación con base en el salario mínimo convencional, es decir, NO se pueden tomar en cuenta otros factores distintos.

Para el 7 de enero de 2009, en Cristalería Peldar existía un manual de nómina que consagraba la forma y los métodos de liquidación de los derechos convencionales. ACLARA que se aplica para los trabajadores activos y para este caso medió un pronunciamiento judicial que determinó como lo debíamos hacer, *distinto al establecido para los trabajadores activos*.

Aquel manual, para esa época, ¿es el que obra a folio 609 a 660? NO tengo certeza.

¿Cómo se liquidan las cesantías definitivas de los trabajadores de la empresa, en cuanto a los componentes del salario que deben tenerse en cuenta? Para los activos se toma el salario en dinero, el factor prestacional, y algunas de las primas que constituyen salario, como las convencionales de junio, diciembre, antigüedad y vacaciones, no recuerda desde que año, pero mínimo en los últimos 20 años ha sido así, pero en este caso como se trata de una decisión judicial, se sujetaron a lo previsto en la sentencia.

De otro lado, los apartes resaltados del auto antes citado, comportan el fundamento del descontento de los trabajadores en relación con la decisión adoptada por el a quo cuando aceptó aquel método de liquidación de PELDAR y, en síntesis, consideran que la sentencia del tribunal ni siquiera debe ser objeto de interpretación.

Y justamente, por lo menos en ese aspecto, esta Magistratura comparte cada uno de los razonamientos plasmados por los trabajadores. La sentencia NO debe ser sometida a un método de interpretación dígase exegético o teleológico para efectos de cuantificar las condenas, óptica bajo la cual ello significaría que carecería de claridad. En múltiples apartes la Sala se ocupó de indicar que, para todos los efectos, se ceñía a lo normado en la convención colectiva que estuviere vigente a la fecha de causación de cada prebenda convencional concedida, cuya cuantificación le correspondía al empleador, pues no se contaba con la totalidad de elementos para tasarla. Igualmente se precisó que el salario era el mínimo convencional, pero NO significa que, para efecto de la liquidación de las condenas, se estuvieran excluyendo los restantes conceptos que gozaban de carácter salarial. Cosa diferente es que la Sala, en aquella solicitud de adición, NO pudiese establecer si una u otra prima gozaba de ese carácter, precisamente, se reitera, al no ser un aspecto ventilado en el trámite del proceso.

No obstante, *mutatis mutandi*, PELDAR debió aplicar el mismo razonamiento que hizo al sumarle al salario en dinero, el salario en especie cuando tasó las primas, pero por razones que se desconocen, NO lo efectuó al estimar el monto de otros emolumentos. Y es aquí donde nos preguntamos ¿acaso la Sala en el cuerpo del fallo estipuló que el *salario en especie* era factor salarial? En la negativa de aclaración el Tribunal sólo indicó, refiriéndose a las prebendas convencionales, que la liquidación se haría en los términos de la norma convencional, pues la demandada debía sujetarse a lo que se obligó al suscribirla.

Entonces ¿Por qué PELDAR no realizó el mismo razonamiento frente a los distintos haberes concedidos como la indemnización convencional, el reajuste de las cesantías y la mesada pensional?

Y es que incluso contradictorio resultaría reconocer que cada uno de los 10 demandantes era beneficiario de la convención colectiva de trabajo, y así declararlo tras un examen exhaustivo del tema, pero concomitantemente privarlo de las prebendas que esta contempla. NO significa que ahora se faculte a los actores a auscultar en cada una de las hojas que plasman el articulado de las convenciones, para exigirle a PELDAR el pago de uno y otro concepto de carácter extralegal, cuyo análisis se escapó del acápite de pretensiones. NO. Lo único que se pretende señalar es que si un haber, prima, indemnización (o cualesquiera fuere su nombre), fue objeto de condena y su génesis se halla en el clausulado de la convención, ha de liquidarse conforme lo establezca dicha convención, al margen de la omisión del operador de citar, una por una, la totalidad de cláusulas que regulan el tema, pues, de un lado, la referencia de uno u otro artículo, no puede llegar al extremo de implicar el desconocimiento del texto integral, y de otro lado, el silencio del fallador en parte alguna tiene la virtualidad de derruir la fuerza vinculante de aquel acuerdo suscrito entre el empleador y la organización sindical, mucho menos de fraccionarlo como ahora lo hace PELDAR al cuantificar el reajuste de las cesantías, la indemnización convencional y el IBL para cuantificar la mesada, desconociendo un asunto, bajo el matiz de acoger la literalidad del fallo.

NO pueden, en ningún contexto, desconocerse esas *conquistas laborales*, expresión utilizada por el a quo para referirse a las prebendas extralegales logradas a favor de los trabajadores, quien tímido se mostró al considerar que NO era dable delimitar el alcance del fallo emitido por su superior funcional.

En todo caso, como se dijo, basta con acudir al texto convencional (folio 58 del archivo 15 del CD2 en la carpeta de primera instancia). Consúltese el documento denominado *aclaraciones en las actas de negociación*, anexo a múltiples convenciones, entre ellas, la suscrita el 27 de noviembre de 2007, cuya vigencia era de 2 años, cuando estipula que:

6. A partir de la fecha de la celebración de este acuerdo se conviene incorporar como cláusula convencional los puntos uno y dos del capítulo denominado acuerdo.

Por lo anterior todos los auxilios, servicios y beneficios o ventajas mencionados en el preámbulo de este escrito no constituyen elemento, ni factor de salario que implique derecho alguno adicional al de la suma convenida o factor prestacional, salvo las siguientes primas convencionales: prima de vacaciones y de antigüedad, prima de junio y prima de navidad, que son constitutivas de salario.

Frente al tema de las CESANTÍAS se indicó en la sentencia que:

Cosa diferente ocurre frente a las cesantías. En una primera oportunidad, y con ello nos referimos a la demanda primigenia, fue ordenado su pago con base en el salario mínimo legal vigente para cada anualidad en que pervivió el vínculo laboral con cada una de las personas que fueron

consideradas trabajadores. Bajo tal panorama, como en este proceso lo que se pretende es que el auxilio de cesantías sea liquidado con el salario convencional, lo procedente es ordenar el reajuste al que haya lugar.

Sabido es que las mismas solo se hacen exigibles al momento de finalizada la relación laboral, tal y como lo ha enseñado la Corte Suprema de Justicia en cambio jurisprudencial reflejado en la sentencia Radicado 34393 de 2010. Por tanto, como esta demanda se presentó a escasos cinco (5) meses de culminado el vínculo, **no alcanzó a operar el fenómeno extintivo de la prescripción, por lo que el reajuste de las cesantías se reconocerán desde el inicio de la relación laboral de cada trabajador, reajuste que resultará de liquidarlas con el salario mínimo convencional aplicable en cada anualidad respecto de la categoría I para el oficio de labores varias o el más bajo en la escala salarial convencional si es que tal denominación no existía para alguna anualidad**, monto que igualmente será indexado al momento del pago, razón por la que en este punto se revocará la decisión apelada y en su lugar se accederá a su pago en los términos indicados. (Resaltos de la Sala)

Y en la parte resolutive que:

QUINTO: se CONDENA a CRISTALERIA PELDAR S.A. a reconocer y pagar a los señores... el REAJUSTE DE LAS CESANTÍAS a que hubiere lugar, diferencia que resultará de la cuantificación que le corresponderá realizar a la demandada al liquidar el auxilio de cesantías con el salario mínimo convencional vigente durante los extremos temporales que rigieron la relación laboral (descritos en el numeral tercero del fallo) y restarle lo que en tal lapso hubiese correspondido con el SMLMV, monto que igualmente será indexado al momento del pago, en los términos previstos en esta providencia.

Recuérdese el extremo inicial de cada vínculo, siendo tal el siguiente:

DEMANDANTE	EXTREMO INICIAL
SAMUEL PORRAS MARTÍN	13/01/1978
JOSÉ MARÍA PORRAS MARTÍN	13/01/1978
ALVARO VARON	01/10/1979
BENJAMIN CHIQUIZA TORRES	20/02/1978
OSBAL GÓMEZ VEGA	26/06/1980
JAIRO RODRIGUEZ CARRILLO	20/01/1983
CARLOS JULIO RINCÓN RAMOS	01/02/1982
RAFAEL ANTONIO PIEDRA	01/02/1984
CARLOS ALFONSO MARTIN	18/03/1993
JUAN JOSÉ MARTÍN	13/07/1986

El problema estriba en que en parte alguna del plenario reposa algún documento que ilustre a la Sala en cuanto al monto del salario mínimo convencional y el factor prestacional (por el salario en especie y las primas extralegales), que a cada año correspondía, es decir, desde 1978 hasta enero de 2009, fecha en que los trabajadores fueron despedidos.

Lo que sí se aprecia en el expediente, es una serie de convenciones suscritas desde 1975 (consúltese el CD 02 del cuaderno digital correspondiente a la primera instancia). Pero en ellas tampoco se aprecia el valor del salario mínimo convencional (entendido en ciertas épocas como el que correspondía al grupo uno

de la estructura de jornales), en algunos se estipula el porcentaje del aumento que rige del 21 de noviembre de un año, al mismo día y mes del año subsiguiente (*verbi gratia*, 1981 el 29%; en 1983 \$192,50; en 1985 \$283; en 1986 un 23%; en 1987 \$445; 1988 un 24%; en 1993 el IPC más dos puntos).

Sólo a partir de la convención firmada el 4 de diciembre de 1991, en el art. 26, se estipuló que para la categoría I donde se agrupaban los aprendices del SENA y labores varias, el salario diario ascendería a \$5.848,26 desde el 21 de noviembre de 1991 y a partir del mismo día y mes de 1992, sería \$7.485,783. Igual sucedió en las convenciones subsiguientes al fijarse montos.

Ello impidió a la Sala, en ese entonces y ahora, liquidar la condena, toda vez que, se insiste, se desconoce el monto de la sumatoria del salario mínimo convencional, el factor prestacional derivado del *salario en especie*, y la doceava parte del monto tanto de la prima de vacaciones (acrecida en días en razón de la antigüedad), como las primas de junio y navidad, causadas en cada anualidad.

Sin embargo, un hipotético ejemplo debe demarcar el actuar de PELDAR, única que conoce la totalidad de esa información.

En el año 2003 el salario mínimo diario convencional era **\$40.355**, el factor prestacional diario de **\$3.289**. Supongamos que en ese año “x” trabajador recibió \$2.500.000 a título de primas extralegales (junio, navidad, vacaciones y antigüedad), ese valor se divide en 12 (dado que cada una de tales primas se causa anual), obteniendo como resultado \$208.333, que a su vez se divide entre 30 (número de días por mes), obteniendo como resultado **\$6.944**. Quiere esto decir que el salario mínimo diario de esta persona era \$50.588, equivalente a \$1.517.640 mensual.

Si en una anualidad el salario mínimo legal mensual vigente ascendió a \$332.000, pero el mínimo convencional (incluyendo los factores salariales) corresponde a \$1.517.640, claramente en esa anualidad el REAJUSTE a pagar es de \$1.185.640. NO importa a este proceso si esos \$332.000 no fueron pagados, será un asunto a ventilar en el proceso ejecutivo de la demanda inicial (entiéndase aquella que primigeniamente incoaron los accionantes, no ésta). Así las cosas, ha de realizarse dicha operación aritmética, en la que NO es dable descontar otro rubro (como intereses a las cesantías o costas) para efectos de tasar el reajuste. La misma operación se hará en cada anualidad y/o fracción para hallar el total adeudado a título de REAJUSTE DE LAS CESANTÍAS.

Así pues, sólo es dable reiterar los parámetros de liquidación, siempre sujetos al texto integral de la convención colectiva de trabajo, vigente para cada anualidad.

El mismo obstáculo se presenta para tasar la INDEMNIZACIÓN CONVENCIONAL, dado que a voces del art. 82, el salario con el que se debe liquidar aquella tabla que reseña la convención (que estatuye un escalafón de días en razón al tiempo de servicio) es *el mismo con el que se liquida el auxilio a la cesantía*.

Tal situación también se presenta respecto de la tasación de la pensión, pues para hallar el IBL y aplicar los parámetros que estatuyó la sentencia en este tema³, debe existir certeza del monto de los salarios que convencionalmente cada trabajador debió recibir mes a mes.

Con base en las consideraciones expuestos, la Sala NO cuenta con los elementos suficientes para acoger o desechar las liquidaciones presentadas por cada una de las partes, siendo lo procedente ordenar a la demandada, a quien le corresponde cuantificar la condena, establecer el monto de lo adeudado respecto de los emolumentos discutidos, conforme los parámetros fijados tanto en la sentencia como en esta providencia, en los términos que más adelante se precisarán.

DESCUENTOS SALUD

Bastará con decir que los mismos operan por ministerio de la ley frente a TODA clase de pensionados, salvo que la norma convencional otra cosa hubiere estipulado, lo que NO ocurre en este caso.

Ahora, el demandante tergiversa la génesis de los fundamentos que se esbozan en la jurisprudencia que cita. Y es que una cosa es la obligación del empleador de asumir la totalidad del aporte al régimen pensional cuando es condenado a pagar un cálculo actuarial a favor de una administradora por haber omitido su deber de descontar mensualmente lo pertinente de la nómina de quien realmente era su subalterno, y otra cosa, muy diferente, es la obligación de una persona de asumir el costo del subsistema de salud en los porcentajes estatuidos en la ley, desde el momento que causó la pensión, al margen que la prestación la hubiese disfrutado meses o años después.

NO se accederá a la cuantificación de este haber.

Y es que conforme al artículo 2 de la Ley 100 de 1993, la solidaridad es un principio general del sistema de seguridad social, entendido este como la práctica de ayuda mutua entre las personas, generaciones y sectores, que no está condicionado a la prestación efectiva de un servicio sino a la contribución económica para el fortalecimiento del sistema. Además de ello, los pensionados son afiliados obligatorios y la cotización a salud se encuentra, en su integridad, a cargo de estos de acuerdo al inciso segundo del art.

³ Cuando se dijo: pensión que deberá reconocerse, en los casos que sea procedente, será aquella regulada en el art. 133 de la Ley 100 de 1993, la que corresponderá liquidar a la sociedad demandada en los términos previstos en dicha preceptiva, concordada con la fórmula definida en el art. 34 ibídem ($r = 65.50 - 0.50 s$), teniendo en cuenta los extremos temporales que rigió la relación laboral y para efectos de calcular el ingreso base de liquidación -IBL-, el promedio corresponderá al salario mínimo convencional vigente durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, sin que en ningún caso la prestación pueda ser inferior al salario mínimo legal.

143 ibídem, imponiéndose en tal sentido una obligación a la entidad pagadora de descontar la cotización y transferirla a la EPS.

De su lectura, no se infiere que el legislador hubiese establecido alguna distinción al definir el momento a partir del cual debía hacerse el aporte, pues sólo indicó que la cotización estaría en su totalidad a cargo de los pensionados, por lo que se entiende que es desde que la persona adquiere el estatus, punto en el que resulta factible recordar aquel postulado según el cual, si la norma no distingue, no le está dado al intérprete hacerlo.

Profusos y unánimes han sido los pronunciamientos que sobre el tema ha ocupado la atención de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde aquellas primigenias sentencias de radicación 54480 y 46234, al considerar que la administradora (para el caso empleador) en efecto está facultada para hacer el aludido descuento por aportes a salud desde el momento en que la persona ostenta la calidad de pensionado, así NO hubiere disfrutado de la prestación desde la fecha en que se reconoció un retroactivo, e incluso va más allá estableciendo que si el fallador omite autorizar aquel descuento, éste operará de pleno derecho. Consúltese las sentencias de radicación SL1346-2023, SL635-2023, SL2467-2022 y SL2958-2022.

INDEXACIÓN

En la sentencia se indicó:

Igualmente se accederá a la INDEXACIÓN de la suma adeudada a cada trabajador por concepto de indemnización convencional, atendiendo que efectivamente este dinero no entró ni ha entrado al patrimonio de los demandantes y que cuando lo haga, por efectos de inflación, el mismo estará envilecido o desvalorizado. Por ello, la sociedad demandada deberá indexar el monto adeudado al momento en que proceda a realizar el pago real y efectivo de la obligación, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, teniendo como índice inicial el vigente para enero de 2009 y como índice final el que rija a la fecha del pago total de la obligación, aplicando la siguiente fórmula: *Indexación = Índice final/ Índice inicial x capital – capital*.

Igualmente se estableció expresamente qué rubros serían objeto de tal actualización. NO hay pues criterios a definir para su tasación. Ahora, si algún concepto se dejó de indexar, habrá de esclarecerse en el trámite de un proceso ejecutivo, NO así en este incidente cuya finalidad es establecer los montos de las condenas.

Frente a la indexación de un eventual retroactivo pensional, la misma NUNCA fue ordenada, tornándose improcedente su tasación, menos aún en esta oportunidad procesal a través de la cual el legislador previó la posibilidad de liquidar una *condena en abstracto*. Si no fue objeto de condena, NO le es dable a la Sala pronunciarse sobre la procedencia o monto de la misma.

COSTAS

Como se advirtió en la sentencia emitida por este tribunal el 11 de mayo de 2018, los reproches frente a estas sólo serán objetables una vez se emita el auto que apruebe la liquidación de las costas. Consúltese el numeral quinto del art. 366 del Código General del Proceso, según el cual *la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.*

No es pues está la oportunidad procesal para abordar el punto.

Y en cuanto al eventual PAGO EN EXCESO cuya existencia alega PELDAR, al margen que la destinación del mismo o su compensación con el valor de las costas, fuese o no un punto a examinar en este incidente, lo cierto es que al NO existir certeza de su existencia, precipitado resulta realizar cualquier elucubración.

Así pues, esta Sala REVOCARÁ la decisión objeto del recurso de alzada y en su lugar ORDENARÁ a PELDAR entregar al despacho de origen, en un plazo que NO podrá exceder a 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, una liquidación pormenorizada y clara de los aspectos que a continuación se enlistarán, pues fueron estos y no otros, en los que se edificó la polarización de la postura de ambas partes, así:

- Enlistará el monto del salario mínimo diario (entiéndase el más bajo en la escala salarial) fijado en la Convención Colectiva de Trabajo vigente para cada anualidad desde 1978 hasta 2009.
- Igualmente establecerá, sobre ese mismo lapso, es decir, entre el año 1978 y 2009, el valor diario del salario en especie y/o factor prestacional. Si respecto de alguna anualidad no operó, deberá indicarlo.
- Reseñará, frente a cada uno de los 10 demandantes, al margen que hubiese o no operado el fenómeno jurídico de la prescripción, cuál es el valor que durante cada año de servicio hubiese recibido por concepto de prima de vacaciones y antigüedad, prima de junio y prima de navidad, claro está, si para esa época existían, de acuerdo a los parámetros de la convención colectiva de trabajo vigente para cada anualidad.
- Tasaará el valor del reajuste de las cesantías y la indemnización convencional que a cada accionante corresponde, atendiendo los criterios expuestos en esta providencia, concatenados con los parámetros fijados en la sentencia.
- Explicará los parámetros tenidos en cuenta para cuantificar el IBL y la tasa de remplazo al tasar la primera mesada de la pensión sanción. Adicionalmente señalará a partir de qué fecha comenzó a pagar dicha prestación a cada demandante, precisando el valor consignado a cada uno.

Lo anterior, so pena de ejercer los poderes correccionales que estatuye el Código General del Proceso en el art. 44 cuyo tenor es:

“(…) el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

1. Sancionar con arresto inmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
2. Sancionar con arresto inmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.
3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados para rendir declaración o atender cualquier otra citación que les haga (…)

Sin costas en esta instancia.

4 DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: REVOCAR la decisión mediante la cual el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado decidió lo atinente al incidente de liquidación de sentencia, y en su lugar **ORDENA** a **CRISTALERÍA PELDAR S.A.** ENTREGAR al despacho de origen, en un plazo que NO podrá exceder a 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, so pena de las sanciones a las que hubiere lugar, una liquidación pormenorizada y clara en los siguientes términos:

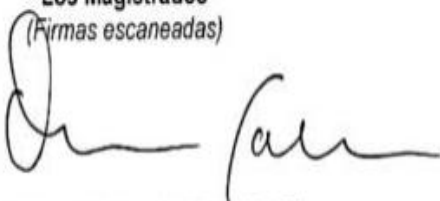
- Enlistará el monto del salario mínimo diario (entiéndase el más bajo en la escala salarial) fijado en la Convención Colectiva de Trabajo vigente para cada anualidad desde 1978 hasta 2009.
- Igualmente establecerá, sobre ese mismo lapso, es decir, entre el año 1978 y 2009, el valor diario del salario en especie y/o factor prestacional. Si respecto de alguna anualidad no operó, deberá indicarlo.
- Reseñará, frente a cada uno de los 10 demandantes, al margen que hubiese o no operado el fenómeno jurídico de la prescripción, cual es el valor que durante cada año de servicio, hubiese recibido por concepto de prima de vacaciones y antigüedad, prima de junio y prima de navidad, claro está, si para esa época existían, de acuerdo a los parámetros de la convención colectiva de trabajo vigente para cada anualidad.

- Tasaará el valor del reajuste de las cesantías y la indemnización convencional que a cada accionante corresponde, atendiendo los criterios expuestos en esta providencia, concatenados con los parámetros fijados en la sentencia.
- Explicará los parámetros tenidos en cuenta para cuantificar el IBL y la tasa de remplazo al tasar la primera mesada de la pensión sanción. Adicionalmente señalará a partir de qué fecha comenzó a pagar dicha prestación a cada demandante, precisando el valor consignado a cada uno.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 018 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 05 DE FEBRERO DE 2024

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>